

Venezuela. La crisis del rentismo

Salamanca, Luis

Luis Salamanca: Político venezolano. Profesor del Instituto de Estudios Políticos, Universidad Central de Venezuela, Caracas.

Al igual que otros países latinoamericanos, Venezuela se debate desde hace varios años entre la necesidad de generar una economía productiva y una estratificación social más equilibrada. Alrededor de estos dos grandes temas se han articulado los relativos a quién y cómo puede lograr esto. Es decir, qué sujetos políticos y sociales y con cuáles estrategias podrán llevar al país a una nueva etapa de su historia, la cual surgiría necesariamente de la superación de la Venezuela petrolera. Si bien esta hipotética condición futura gana día a día mayor consenso, no obstante su puesta en práctica, el tendido de los rieles por donde transitaría la era post-petrolera, enfrenta colosales problemas políticos, costos sociales, desgarramientos sico-culturales y dificultades internacionales. En términos generales, esto es lo que ha estado en la discusión y en la confrontación entre estatistas, neoliberales y terceristas. ¿Dónde se ubica el gobierno electo en diciembre pasado?

La llegada de Rafael Caldera al poder después de las elecciones generales del 5 de diciembre de 1993, subraya en forma dramática la potencia de los nudos históricos que se han formado en esa transición hacia una nueva condición, por lo pronto incierta en grado sumo. El veterano líder de 78 años regresa al poder después de haberlo ejercido 20 años antes, previa ruptura con su propio partido, el demócrata cristiano COPEL, del cual fuera su fundador en 1946. Este hecho constituye una pequeña muestra de las dislocaciones y transformaciones que han ocurrido en la política venezolana en los años 80, las cuales fueron aceleradas durante el quinquenio de Carlos Andrés Pérez (1989-1994).

El fin de la movilización social

A lo largo de esos veinte años que separan a Caldera de su primer gobierno (1969-1974) Venezuela completó su proceso de movilización social iniciado con el hallazgo de petróleo. El país alcanzó un cierto umbral de modernización sociopolítica expresado en términos de alta tasa de urbanización, un crecimiento económico persistente, incremento de la densidad demográfica con alta concentración en los llamados «polos de desarrollo», fuerte impulso de las actividades económicas no agrícolas, reducción significativa del analfabetismo, una opinión pública cada día

más incisiva gracias a la penetración de los medios de comunicación de masas en el seno de la población y, por último, incorporación de los sectores rurales y urbanos, a la participación político-electoral.

Este proceso de movilización social petrolera, ha sufrido, sin embargo, paralización y reversión crecientes a partir de 1983, cuando comienza una nueva historia económica marcada por el traumático fin del subsidio a la moneda nacional. En febrero de ese año el gobierno de Luis Herrera Campíns devalúa el bolívar iniciándose así una trayectoria económica caracterizada por inflación persistente, estancamiento económico con alguno que otro año de crecimiento positivo, eclosión de la crisis de la deuda externa, deterioro de las condiciones de vida y empobrecimiento de amplios sectores sociales, crisis fiscal recurrente, caída de la inversión y descenso de los precios del petróleo, entre otros. Estos elementos se han ido articulando de tal forma, que activaron, junto a otros, la crisis socioeconómica más profunda de la historia contemporánea. Esta se vio acelerada y potenciada a partir de 1989 con la política de ajuste estructural introducida por Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato, presionado por el virtual agotamiento de las reservas internacionales, que el anterior gobierno de su compañero de partido Acción Democrática (AD), Jaime Lusinchi, había dejado en apenas 300 millones de dólares.

La nueva política económica de Pérez, poco publicitada en la campaña electoral, estaba pensada justamente para evitar que el país terminara cayendo por el despeñadero de la crisis, para detener el potente haz disolvente que los gobiernos anteriores habían venido configurando. Corregir y superar ese anudamiento de rigideces económicas, trascender el intervencionismo estatal y poner en marcha nuevas reglas de juego sociales y económicas para evitar que la situación empeorara, fue el gran objetivo de su gobierno. En ese contexto se implementó el VIII Plan de la Nación, mejor conocido como el «Gran Viraje», documento de gran importancia en el cual se ponían en claro los problemas del país, se evidenciaba el agotamiento del modelo basado en la sustitución de importaciones, se cuestionaba el modelo institucional centralista y se postulaba la necesidad de que el Estado dejara espacio para la actividad privada, es decir, para que el mercado operara libremente. Sin embargo, la difícil realidad transitaba por otros caminos.

El Caracazo y el Gran Viraje

La acumulación de distorsiones sociales y económicas que alimentaron una situación de deterioro sico-social en importantes sectores de la población, unida a la especulación desatada por comerciantes acaparadores y la alarma creada por el anuncio de una severa política económica que sustituiría el modelo prevaleciente desde 1958, provocó la explosión social del 27 de febrero de 1989, sin antecedentes en la historia contemporánea del país. La medida puntual que desencadenó el Caracazo fue el aumento de la gasolina, que generó un incremento de los costos del transporte colectivo, y su paralización por parte de los conductores al considerar que el aumento decretado por el gobierno era insuficiente. Este hecho llevó imperceptiblemente a un eslabonamiento de situaciones de violencia que al cabo de varias horas cubrió gran parte de la capital y alcanzaría a otras regiones del país.

Comenzaba así el explosivo quinquenio de Pérez. Un quinquenio «revolucionario» que desarticuló un modo de vida de setenta años alimentado por la renta petrolera; legando para la historia un gobierno que ha venido a fungir como una suerte de Frankenstein de la clase política venezolana, llevándose por delante en primera instancia a su propio creador (depuesto en mayo de 1993 por sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que encontró méritos para su enjuiciamiento por presunta corrupción) y colocando sobre el resto de la élite política «puntofijista» la amenaza persistente de desaparición y liquidación.

El Gran Viraje tocó así al establishment político, colocándolo en una situación de crisis que aún no se ha resuelto, amenazando con desarticular el sistema democrático establecido en 1958. La irrupción, relativamente inesperada de los militares el 4 de febrero de 1992, potenció la crisis político-institucional y condensó el resto de los desajustes sociales, económicos y sico-sociales, en una sola gran crisis. Por primera vez en muchos años todas las crisis aparecían juntas, actuando con una potencia disolvente nunca antes vista en la historia contemporánea del país.

Pese a ese violento y cruento bautizo, el Gran Viraje continuó su marcha, poniendo en práctica lo que desde entonces se conocerá con una fuerte carga estigmatizadora como el «paquete» de medidas destinadas a posibilitar la libertad económica. Reducción o eliminación de subsidios, liberalización del sistema financiero, apertura comercial, desgravación arancelaria, eliminación del control de cambios, liberación de precios, congelación de salarios, fueron las medidas favoritas del gobierno, evidenciando una inclinación economicista que marcaría todo su período. La política social vendría un poco después, pero en términos compensatorios y transitorios.

Escasamente compensatorios frente al deterioro sufrido en las condiciones de vida de los más pobres por efecto de la inflación y la devaluación. El dualismo entre lo económico y lo social, la separación de ambos aspectos, uno relleno del otro, no como una propuesta orgánica, condenó socialmente el reajuste económico y marcó al gobierno de Pérez como insensible ante la problemática de pobreza creciente que envolvía a amplios sectores mientras disminuía a la clase media. Los resultados socioeconómicos más importantes del quinquenio fueron contradictorios en lo económico, y altamente cuestionables en lo social, razón por la cual llegó a ser criticado estimulando la más alta tasa de protesta y conflictividad social en todo el período democrático. En lo económico puede decirse que no llegó a estabilizarse un patrón de comportamiento de la economía que permita una lectura clara de los éxito del ajuste. Mientras que en materia de bienestar es casi unánime el acuerdo acerca del deterioro de los salarios reales y de las condiciones de vida.

Efectos del ajuste

El Mapa de la Pobreza elaborado por la Oficina Central de Estadística e Informática, muestra una geografía nacional crecientemente invadida. Un poco menos de la mitad del país es hoy pobre. Según la OCEI, más de 8 millones de personas se encuentran en esta situación sobre un total de casi 21 millones; 11 de los 23 estados del país concentran más del 50% de la población en situación de pobreza. Otros estudios constatan la explosión de pobreza vivida desde 1980 hasta 1989, y cómo a partir del ajuste estructural, si bien en algunos momentos tiende a la baja, no obstante no logra reponerse a sus niveles previos a 1980. Los técnicos de la Oficina Central de Planificación, al momento de elaborar el Plan de Ajustes Estructurales, determinaron que los hogares en situación de pobreza crítica, habían pasado de 69.000 en 1981 a más de 600.000 en 1988. El Banco Mundial estimó la pobreza para el año de 1982 en 33%, mientras que para 1989, incluidos ya los efectos del primer año de ajuste, aquella alcanzó un 53% . Un estudio de FUNDACREDESA sostiene que los estratos de pobreza crítica alcanzan al 40%, mientras que el estrato de la clase media había descendido de 14% en 1982 a 13% en 1992. Un dato importante de este informe es que los estratos I y II, los de más altos ingresos mejoraron en un 3%, al pasar de 5 a 8 por ciento. La trayectoria estadística de la pobreza en Venezuela muestra que ella ha sido una variable persistente en la vida nacional. Sin embargo, sufrió modificaciones importantes entre 1958 y 1979, pero retomó un impulso en los 80 no revertido sino acentuado por el ajuste estructural. Según algunos analistas, el salario mínimo real cayó desde 1989 a 1994 en un 56%.

Evidentemente, esta trayectoria social de la democracia venezolana, tiene que ver no sólo con las políticas distributivas implementadas (y que ponen en el tapete el asunto de las prioridades del gasto nacional) sino también con la evolución de la economía nacional. Existe consenso entre los economistas acerca de que Venezuela constituyó un modelo de crecimiento económico y baja tasa de inflación entre 1960 y 1979 aproximadamente. Este entramamiento de la economía con sus efectos negativos sobre el bienestar social, plantearon y justificaron la necesidad de una reformulación de las estrategias socioeconómicas e institucionales seguidas en los treinta años anteriores a 1989. Como ya dijimos, había que buscar otro camino para la economía, la sociedad y el Estado. A tales efectos, se diseñó una política económica que generara crecimiento sin inflación. Los resultados del quinquenio, sin embargo, muestran otro comportamiento.

El crecimiento económico en el quinquenio mostró un comportamiento irregular entre la expansión y el estancamiento. Los años 1989 y 1993 fueron de crecimiento negativo (-8,3 y -1% respectivamente), mientras que los años 90, 91 y 92 fueron de crecimiento positivo (5,3; 9,7 y 6,8%). Sin embargo, parecen más claros los fracasos del programa. En lo relativo a la inflación, según los especialistas en la materia, ésta montó a un acumulado de cerca de 230% entre 1989 y 1993. Las previsiones del gobierno esperaban una tasa moderadamente alta al arrancar el reajuste, no mayor de 35% en 1989 (la tasa real fue de 81%) hasta alcanzar progresivamente los niveles inflacionarios de los países con los cuales comercia Venezuela. Mientras, se preveía un crecimiento económico entre 4 y 5 por ciento en el sector no petrolero. Por otra parte, la dinámica económica se vio afectada por ciertas omisiones estratégicas en el plan de ajuste: la ausencia de una reforma impositiva, y también financiera, que permitiera la entrada de la banca extranjera de cara a una más estricta competencia. Estos elementos a la postre se convertirían en los fieles de la balanza económica porque, por una parte, el Estado se quedaría sin alternativas para cubrir el déficit fiscal ante la persistente caída del precio del petróleo por otra parte, el alto costo del dinero, producto de las altas tasas de intereses para préstamos bancarios, puso en aprietos a la industria nacional y generó una distorsión en el papel de la banca, que de intermediario financiero pasó a inversionista, creando cuadros de liquidez bancaria que finalmente estallaron en enero de 1994 con la intervención oficial del Banco Latino, el segundo del país, al cual se unieron ocho bancos más que entraron en el sistema de asistencia financiera del Estado venezolano.

Con esta última crisis (verdadera explosión financiera) cierra el quinquenio del Gran Viraje; durante el trayecto Venezuela sufrió de todo tipo de desarticulaciones: sociales, económicas (el reajuste anti-estatista), militares (los fallidos golpes milita-

res del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992), judiciales (la remoción del presidente Carlos Andrés Pérez), culturales (la crisis del rentismo estatal, aunque la dinámica financiera generó una nueva modalidad de rentismo individualista: el bancario, distinto del estatal, o social, que evidentemente languidece desde hace ya varios años), y, por último, como resumiendo todo el conjunto de dislocaciones, el desplome relativo de los alineamientos políticos conocidos en el país desde 1974. El período de Pérez cuenta también en su saldo con la aparición de un nuevo mapa político cuya afinidad con el de la pobreza pudiera suscitar algunos estudios interesantes acerca de la relación entre ambas categorías en la actualidad, la eventual emergencia de un voto «clasista», entre otros temas.

El nuevo mapa post-electoral

Las elecciones del 5 de diciembre de 1993 constituyen otro hito fundamental del quinquenio del ajuste estructural. Los resultados aportan una significativa recomposición del cuadro político bipartidista que había predominado desde 1974. Vistos ponderadamente, pudieran significar el comienzo de un proceso de transformación de las fórmulas políticas tradicionales (AD y COPEI), eventualmente su superación por otras fuerzas, surgidas del propio seno de esos partidos, o desde afuera, aunque algunos analistas sostienen que los resultados de 1993 son un circunstancial tropiezo para los dos polos fundamentales de la política nacional. Por lo pronto, no es nada despreciable para el balance histórico, el hecho de que AD y COPEI juntos pasaran de un 90% o más del control del electorado nacional, a algo más del 50%. Mientras que una fuerza política emergente como La Causa Radical, difícil de ubicar ideológicamente (quizás pueda definirse ampliamente como neopopulista), se convierte en la gran ganadora obteniendo el 21,95% de los sufragios, pasando de 26.597 votos en 1988 a 1.232.653 en 1993, no muy lejos de su archirrival AD, que obtuvo el 23,23% y bastante cerca de COPEI, que obtuvo el 22,11%. El resto del espectro electoral se lo reparten un movimiento creado alrededor de la figura de Caldera llamado Convergencia, que obtuvo 17,03% y finalmente el Movimiento al Socialismo (MAS), que alcanzó el 10,59% de los sufragios.

Una lectura un poco más cercana de estos resultados nos indica la aceleración de la crisis histórica del sistema político inaugurado en 1958, y el impulso de sus tendencias de cambio que como ya dijimos se precipitaron en el marco del Gran Viraje. Quizás le restó impacto a los resultados el hecho de que la candidatura de Claudio Fermín, por AD obtuviera el segundo puesto, cuando casi todas las encuestas lo daban en un lejano cuarto lugar, mientras que el abanderado de La Causa R, se le situaba entre el tercero y el segundo. A partir de lo cual pudiera decirse que el gran

derrotado no fue AD (partido de gobierno), sino COPEI, al cual dada la lógica de la política venezolana, le correspondía obtener el triunfo, más aún cuando había sido el gran triunfador en las elecciones de gobernadores de diciembre de 1992.

Con esta nueva derrota COPEI suma 10 años fuera del poder, y, de no haber rupturas constitucionales cumplirá 15 años, 3 períodos consecutivos sin conocer la victoria. Y lo más dramático de su situación es que quien lo derrota es nada más y nada menos que su propio fundador, padre político de casi todos los líderes copeyanos importantes, entre los cuales cabe mencionar a Eduardo Fernández y Oswaldo Alvarez Paz (este último candidato presidencial), principales pupilos políticos del hoy presidente. La situación de COPEI hoy en día es peligrosa, por no tener muy claro hacia dónde va ideológicamente, por lo costoso de su apoyo al depuesto presidente Pérez, por su defensa del programa de ajustes y por la división no oficializada que ha ocurrido en ese partido con la salida de Caldera y la conformación de Convergencia.

La situación de AD tampoco es muy halagadora visto el asunto en términos históricos. Pasa de obtener en 1988 3.859.180 votos, el 52,76% del total de sufragios, a 1.304.849 en 1994, que constituye una pérdida de 2.554.331 votos, casi el 30% en relación con 1988. El mérito de Claudio Fermín estuvo en impedir que este descalabro fuera peor. Con estos resultados AD disminuye su poder parlamentario y continúa su desgaste en los más importantes estados venezolanos, en las zonas industriales y en el voto obrero. ¿Tiene AD posibilidad de revertir este resultado y volver por sus fueros? Los resultados muestran que el militante de este partido fue tocado en su identidad política por el mensaje del candidato presidencial. Mantuvo a sus militantes dentro de la hegemonía acciondemocratista. Evidentemente pasó la prueba que suponía el desgaste de 10 años en el gobierno, la explosión del 27 de febrero del 89, los golpes militares fallidos del 92, la destitución del presidente Pérez y el enjuiciamiento por presunta corrupción de dos ex-presidentes venidos de sus filas.

Sin embargo, el espacio político venezolano es hoy un terreno fuertemente competido por fuerzas emergentes como La Causa R, movimiento con muchas similitudes con el PT brasileño y al cardenismo mexicano. El éxito de La Causa R es un enorme boquete abierto en el espectro político venezolano. Pero tiene por delante la prueba de su propia consistencia programática e ideológica: que pueda pasar, políticamente, de lo combativo a lo propositivo. El futuro de Convergencia como fuerza política está muy ligado al destino del presidente Caldera. Luce como una fuerza transitoria, muestra de la grandeza política del viejo líder más que de un

proyecto político colectivo. La situación del MAS es paradójica. De ser una revelación política nacional e internacional a comienzos de los 70, se estancó electoralmente por casi tres períodos, hasta que la elección directa de gobernadores de Estado en 1989, le diera un segundo aire. Desde entonces el MAS crece en las regiones, obteniendo varias gobernaciones directamente (en este momento posee 3, pudiendo llegar a 4 ó 5) y haciendo posible el triunfo en otras mediante alianzas, pero su votación como partido nacionalmente luce estancada.

La salida de la prisión del ex-comandante Hugo Chávez Frías, líder de la asonada militar del 4 de febrero de 1992, constituye un nuevo potencial de reajuste del mapa político nacional. Es muy pronto para vaticinar alguna evolución significativa del chavismo, pero se ha notado el impacto positivo que ha tenido su salida de la cárcel en ciertos sectores, y su virtual declaración de guerra contra el sistema político, incluida La Causa R, movimiento que defendiera su alzamiento. Chávez y el bolivarianismo, tendrán que pasar la prueba de la desmitificación del 4-F, de la rutinización del carisma a que somete la política venezolana en este momento, por su elevada capacidad de asimilación de las novedades.

Un hecho interesante producido también en el quinquenio anterior, después del 4-F, es el surgimiento de pequeños grupos políticos, integrados por intelectuales y profesionales, algunos de los cuales fundamentan su corta existencia en la denuncia del agotamiento del proyecto político nacional que condujo a Venezuela hasta 1989 y la necesidad de la formulación de uno nuevo, que pueda movilizar al país hacia una nueva etapa democrática. Estos grupos están dando sus primeros pasos. Su incursión en las elecciones de diciembre fue su primera prueba electoral con resultados bastante modestos. De esos grupos uno de los más interesantes es Factor Democrático. El gran reto es el de convertirse en fuerzas políticas mediante su inserción en la lucha política cotidiana, caracterizada en este momento por un elevado nivel de confrontación, de verdadero pugilato interpartidista.

El otro gran «partido» que se consolidó en diciembre, fue el de los abstencionistas. Un 40% o más de los venezolanos no se sintieron convocados por ninguna de las alternativas presentes en la contienda electoral. La abstención continúa mostrando una tendencia al alza, duplicando la de 1988, que estuvo alrededor del 20%. Este nuevo mapa político conjuntamente con los otros mapas dibujados en este artículo, hacen de la toma de decisiones a nivel gubernamental un asunto realmente complejo, con altas probabilidades de entrebamamiento y paralización de la acción del gobierno de Caldera. En ese contexto ya se han asomado hipótesis «fujimoristas» o

propiamente calderistas en relación al papel del Congreso, cuyo virtual empate de fuerzas, dificulta la acción del gobierno.

Como puede deducirse de todo lo anterior, el Gran Viraje ha sido no sólo una reestructuración económica, sino algo más profundo: una voltereta de la sociedad toda. Una declinación profunda del andamiaje social, económico y político-cultural montado desde 1958, cuyos orígenes se pueden detectar en los tiempos del dictador Juan Vicente Gómez, entre 1908 y 1935. Esta es la herencia del nuevo equipo de gobierno liderado por Caldera, quien llega a la Presidencia montado en la ola de críticas y capitaneando la oposición que desató el paquete de Pérez. Caldera capitalizó la onda expansiva del 4-F, que dividió en dos la historia democrática del país.

Del boom al slump petrolero

El nuevo presidente encuentra al país en uno de sus ciclos económicos descendentes. Antes le tocó gobernar con pocos recursos fiscales y con escaso apoyo político en el Congreso. Hoy le corresponde la misma suerte. Pero peor, porque su gobierno debe cumplir el papel de gran bombero apaga fuegos de los incendios desatados en el quinquenio anterior, habérsela además con la acumulación de viejos problemas dejados sin solución por otros gobiernos, y tratar de darle un rumbo al país. La administración Caldera arranca con el ciclo más crítico de la historia reciente: el del slump petrolero. De los dos ciclos económicos que ha habido en Venezuela desde 1974, a Caldera le ha tocado el peor. El del boom petrolero llevó el precio del barril de US\$ 2 a 14 y hasta 34 en el gobierno de Herrera Campíns (1979-1984), haciendo soñar al primer gobierno de Pérez con la gran Venezuela. El ciclo del slump petrolero ha llevado los precios del petróleo a los niveles de 1974, con la expectativa de que sigan bajando, situación que ha hecho despertar violentamente de aquel sueño, pero en otra nación: en la Venezuela de la gran crisis.

A la nueva administración le toca capear con los problemas de ambos ciclos: con la agenda histórica no resuelta que hoy amenaza la estabilidad social y política, y con la nueva agenda de problemas creada en la década perdida de los 80 y el quinquenio, que puso «patas pa'arriba» a una nación que disfrutara de un estatus medio a nivel internacional y que hoy corre el riesgo de pertenecer al club de los países más atrasados.

El auge y caída de la palanca petrolera es el telón de fondo de la trama actual del país, que ya no cuenta con los recursos petroleros, ni con los políticos o sociales de los 70. De aportar alrededor del 70% de los recursos fiscales, el petróleo ha pasado

a representar cerca del 40% de los mismos, planteando la vigente necesidad de una Venezuela post-petrolera, cuya configuración es dificultosa dado el arraigo de la cultura rentista en la sociedad. Con una crisis tan profunda Caldera está teniendo problemas para arrancar su gobierno. Las expectativas generadas son grandes, aunque diversos sectores reconocen los numerosos obstáculos existentes. El más impaciente es el pueblo, donde Caldera llegó con mucha fuerza, y que espera de él que le «arregle esto». El sector empresarial, que dudó casi totalmente del mensaje calderista durante la campaña electoral, sigue mirando con escepticismo sus primeros pasos. La opinión pública se debate entre la crítica al equipo económico por haberse negado a aplicar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y aumentar los precios de la gasolina, medidas que según entendidos podrían cubrir en pocos años el déficit fiscal, (el cual según el Banco Central de Venezuela, podría superar en 1994 el 7% del PIB), otros ven un margen muy estrecho para actuar dada la precaria situación social y económico-fiscal y algunos creen que el gobierno está dando los pasos adecuados, con cautela, pensando básicamente en sacar la tarea de este año, el cual se considera será de crecimiento negativo.

Los desafíos económicos

Rafael Caldera llega al gobierno sin un programa económico claro. Sus premisas son una gran preocupación social y la búsqueda de deslinde con el FMI. A tales efectos firmó en su campaña electoral, una «Carta de intención con el pueblo venezolano» como una manera de indicar que no hará lo mismo que hizo Pérez a comienzos de su mandato suscribiendo la llamada Carta de Intención con el FMI, a objeto de recuperar las reservas internacionales. Durante el primer trimestre de gobierno, Caldera ha persistido en sus preocupaciones sociales y anti-FMI, añadiéndole a ambas una enorme angustia fiscal. En relación con lo primero, trata de evitar que los costos de la reforma económica sigan siendo repartidos en forma desigual e inequitativa. En relación a lo segundo, dado su rechazo al IVA y al aumento de la gasolina, busca fórmulas impositivas alternativas y satisfactorias, es decir, que cumplan con el requisito de la equidad y bajen el déficit fiscal al 2% del PIB. Sin embargo, pese a lo que muchos analistas y el mismo gobierno han dicho, Caldera no pareciera estar en contra de la continuidad del ajuste estructural iniciado por Pérez en 1989, aun cuando haya asegurado que no estaba amarrado a ninguna política económica en particular, con el claro propósito de diferenciarse de aquel, quien a la sazón era el blanco político ideal para optar con éxito a la presidencia de la República. Evidentemente Caldera trata de cambiar el énfasis economicista que tuvo el quinquenio inconcluso de Pérez, por una propensión social, que hasta este momento se ha confirmado en las primeras medidas tomadas, aunque no hayan

significado, en las condiciones actuales del país, un adelanto importante en el pago de la llamada deuda social. En su discurso de toma de posesión Caldera definió el principio rector de su política: la solidaridad social. Esta constituye más una declaración de intenciones que un programa concreto. Pero con la propuesta de solidaridad trata de rescatar cierta noción de cooperación y colaboración entre los diferentes sectores, perdida en el reino de la macro-economía. Es saludable para un país con tantos déficits sociales y humanos, oír desde la presidencia de la República al primer mandatario proponiendo y estimulando la idea de solidaridad, de reparto de los sacrificios.

Muchos han entendido esta preocupación como una vuelta al populismo de siempre. Sin embargo, el nuevo equipo de gobierno, ha demostrado que su problema no parece ser el ajuste estructural, sino la modalidad perecista del mismo. En ese contexto, las posibilidades de continuidad del viraje económico llevado adelante con Pérez se ven amenazadas por el peso de su figura política y por el rechazo que despierta en muchos sectores. Por lo tanto, cualquier política económica, para ser viable, pareciera tener como requisito indispensable no su correspondencia con la realidad, sino una distancia verificable con la desarrollada por el ex-presidente. De allí que las primeras medidas económicas importantes del nuevo gobierno consistieran en un freno a la apertura total impulsada por Pérez, asestando un golpe al corazón de la economía de mercado: la suspensión de las garantías económicas como una forma de detener la especulación y de eliminar definitivamente el IVA, estigmatizado gracias a su mala implementación como símbolo de lo antipopular. El control de precios de productos de la cesta básica de consumo masivo, el aumento del salario mínimo en una proporción aún no definida, el rechazo al aumento de la gasolina, y el intento de parar la inflación por la vía de acuerdos, son otros de los ingredientes de la nueva política económica que indican que la administración tratará de procrear un híbrido entre lo social y lo económico por la vía de la concertación.

En efecto, al lado de medidas de control económico hay un conjunto de proyectos fiscales que muestran que junto a la inclinación por la defensa del poder adquisitivo, por la vía de la intervención económica, se intenta ir hacia una sociedad impositiva, buscando trascender la Venezuela rentista. El llamado plan Sosa, (por el ministro de Hacienda, Julio Sosa Rodríguez; nótese la diferencia con el peyorativo paquete de Pérez) incluye una serie de medidas impositivas que van desde la reforma al Impuesto sobre la Renta, el Impuesto de Débitos Bancarios, el Impuesto General a las Ventas, el Impuesto al Lujo, la reducción del gasto público en 10%, la continuación de la política de privatización, el cumplimiento de los compromisos de

pago de la deuda externa, la atracción de inversión extranjera, hasta el intento de reformar el sistema de prestaciones sociales (un tema muy caro al presidente y al movimiento obrero) entre otras medidas, que según los técnicos del gobierno, buscan sólo estabilizar la economía, dando por sentado que no habrá crecimiento, en 1994. Esta política económica, que pasados dos meses de gobierno no ha arrancado en sus aspectos fundamentales, intenta conciliar aspectos económicos y sociales. Trata de anclar en una suerte de justo medio, entre la continuidad del pasado y el control sobre sus efectos más socialmente dañinos.

La duda es si el plan Sosa podrá lograr la estabilización de la economía. Si hacemos una evaluación en función del posicionamiento de la opinión pública, el resultado sería negativo. Diversos sectores, nacionales e internacionales, han mostrado su escepticismo respecto del éxito de las medidas anunciadas. Algunos han dicho que se están sentando las bases para el fracaso, otros sostienen que la nueva política impositiva es un adefesio, unos «pañitos calientes» para cubrir el hueco fiscal. La opinión más moderada y menos extendida, tiende a ver la cosa en términos no tan dramáticos, señalando que los pronósticos sobre el deterioro económico, son excesivos.

El significado de la solidaridad

Sin embargo, todo dependerá de cómo funcione la estrategia de solidaridad. Si bien el gobierno no ha explicado claramente en qué consiste, dejando abierta la puerta de la interpretación para que cada quien la asuma a su gusto (con lo cual se convierte en una moneda política de alto valor), puede colegirse por todo lo andado hasta ahora que la solidaridad promovida por el gobierno apunta a resolver la crisis en la mesa de la negociación. En este sentido, la solidaridad podría definirse como la negociación social de las reglas del nuevo ajuste económico con el objeto de evitar, o mas bien, de reducir y amortiguar, la inequidad del mismo. Pero la concertación dependerá de cuánto estén dispuestos a ceder los diversos grupos de poder socioeconómicos y políticos. Frente a la imposición casi total del programa de ajustes de Pérez, la solidaridad de Caldera se plantea como una invitación a que los distintos sectores involucrados, en lo que podría ser un reajuste de la apertura perezista, traten de ponerse de acuerdo para lograr vías negociadas acerca de la agenda fundamental del país en este quinquenio.

Ahora bien, ¿qué podría suceder de no lograrlo? Según personeros importantes del gobierno, y por lo hecho hasta ahora, pudieran plantearse dos posibles salidas. Una, el acentuamiento del intervencionismo estatal con mayores controles sobre la

economía. Esta vía produciría una transitoria tranquilidad pero acumularía demasiado material para una crisis económica mayor: represamiento de la inflación, fuga de capitales, caída de las reservas internacionales, incremento del déficit fiscal, entre otros desequilibrios. Se estaría pavimentando la famosa autopista de la hiperinflación Caracas-Buenos Aires.

La otra opción, que probablemente guarda el presidente Caldera en su maletín desde la campaña electoral, consistiría en usar 1994 para incrementar su autoridad moral, fortalecer su legitimidad social y política, tratando de lograr un pacto social para la estabilización de la economía y el posterior crecimiento con equidad, que al no ser logrado, dado que casi ningún actor social quiere perder ni ceder demasiado, el gobierno podría justificar ante la nación la necesidad de una política de ajustes más radical.

Los primeros meses de gobierno se han caracterizado por una lenta y cautelosa búsqueda de una estrategia económica que le permita a la nueva administración equilibrar la economía sin añadir más leña al fuego de la conflictividad social. El primer capítulo fue para los controles. Ahora se espera por el plan impositivo. Sin embargo, la realidad económica se resiste y sigue andando por los caminos de la inflación. El acumulado inflacionario hasta marzo ha sido de 9,3% pese al control de ciertos productos de la cesta básica. Al mismo tiempo, las reservas internacionales han caído en este primer trimestre en cerca de 2.000 millones de dólares, en gran parte producto de la crisis financiera y el nerviosismo de los ahorristas, que han buscado refugio en el dólar frente al peligro de una crisis financiera mayor.

En medio de esta situación, la dinámica político-económica ha estado centrada en la espera por el plan Sosa y la discusión acerca del papel del Congreso de la República en la solución de la crisis. Muy rápidamente el Congreso (instalado el 23 de enero de 1994) ha sido, de nuevo, objeto de críticas devastadoras, tanto desde adentro como desde afuera, llegando a ser propuesta su autodisolución por la bancada de La Causa R. Apenas comenzando el período constitucional de cinco años, el Congreso ha entrado en un proceso preocupante de pérdida de protagonismo, cediendo al Ejecutivo una gran parte de su poder sobre la materia fiscal y otros asuntos, mediante una ley habilitaste, que deja al Presidente la potestad de decidir por decreto sobre tales cuestiones. Esto pone en evidencia lo dicho arriba acerca del entramamiento decisional en el que se encuentra el Congreso, dada su composición política. Pero indica el temor al costo político que podría significar para AD y COPEI el tener que decidir sobre la materia impositiva.

Caldera: ¿neoecepalino sin saberlo?

En estos tiempos en los que las nuevas ubicaciones ideológicas se han alimentado de la oposición entre estatistas (a veces confundidos con populistas) versus neoliberales, resulta importante establecer la inclinación de la nueva administración. Más allá de sus planteamientos tradicionales de «justicia social», el presidente Caldera se ha movido siempre en el marco de lo posible, de lo que la realidad permite hacer. Puesto en el contexto actual, esto podría formularse de la siguiente manera: atacar problemas públicos con intervencionismo estatal cuando sea necesario, y/o permitir la libertad económica cuando sea posible. En esto consiste el pragmatismo calderista actual. La nueva administración, pero sobre todo Caldera, no ha tenido demasiada preocupación por su ubicación ideológica. Sin embargo, echando mano de los parámetros ideológicos que se ensayan hoy en América Latina, pareciera que el gobierno venezolano se aproxima, con cierta libertad, a los planteamientos puestos en circulación por la CEPAL a finales de los años 80. Transformación productiva con equidad es el planteamiento central de la nueva CEPAL. Ingredientes importantes del neoecepalismo son, entre otros, la preocupación por tratar el hecho económico en forma «sistémica», tomando a la empresa en su red de vinculaciones con otros elementos de la vida económica; la elevación de la productividad no sólo industrial sino del resto de los sectores económicos; la sustentabilidad ambiental del crecimiento; la liberalización comercial erradicando el llamado «sesgo anti-exportador» de las economías latinoamericanas; la complementariedad entre las políticas para el crecimiento económico y las políticas distributivas, superando el dualismo entre la estrategia económica y la de bienestar; capitalización de la pobreza por la vía de incentivar el micro-empresariado y continuación de los programas de compensación para los más pobres; necesidad de aumentar la tasa de inversión y de ahorro interno, lo cual apunta a la apertura a la inversión extranjera y a la necesidad de políticas fiscales internas; integración latinoamericana y caribeña, a través del llamado «regionalismo abierto»; renovación de los estilos de intervención estatal. Según esta tesis, la concertación es la «plataforma mínima» para poner en sintonía al Estado y la sociedad civil y lograr la legitimidad del crecimiento con equidad.

Esta tesis ha sido calificada por la CEPAL, como pragmática. Ni liberalismo a ultranza, ni proteccionismo desmedido. El gobierno venezolano ha venido definiendo su acción pública, si no inspirado, muy cerca de estos planteamientos neoecepalinos. Venezuela continúa envuelta en el trauma de superar el paradigma político rentista que nos ha regido de la mano del petróleo durante casi todo este siglo. Este paradigma ha permeado los modos de vida, las formas de organización social y

política, la naturaleza de la economía, los horizontes de la cultura global de esta sociedad. Hoy nos encontramos en trance de ingresar a una nueva era, aún en contra de la voluntad de muchos sectores, y cuyos perfiles no son nada claros. Las apuestas, no obstante, se inclinan por llamarla la era post-petrolera.

Caracas, abril de 1994